



CONSULTAS POPULARES: LA VIABILIDAD ESTÁ EN LA GENTE

Uno de los signos más distintivos de los tiempos que corren es el incremento de la movilización social. Es un fenómeno global, que en el caso de Colombia está atado además a la transición al posconflicto. La emergencia de nuevos competidores políticos, el activismo judicial y una agenda ideológica que se busca camino por vías electorales, exacerban los conflictos sociales y ambientales.

Los mal llamados territorios periféricos constituyen, en este nuevo contexto, los epicentros del posconflicto. Están marginados de la actividad institucional, pero son económicamente estratégicos por sus recursos. Áreas de mercado sin Estado, en las que se harán las nuevas apuestas por el poder. El adiós a las armas abre las compuertas para la acción colectiva.



En muchas de estas regiones opera el sector minero energético. Lo hace en medio de conflictos crecientes entre el centralismo y los reclamos de autonomía regional. En el mundo en el que los liliputienses amarran a Gulliver, las comunidades presionan a las empresas del sector con dos propósitos concurrentes o independientes: la obtención de beneficios directos y tangibles de la actividad, como fuente sustituta ante la precariedad de la oferta institucional, y la contención de daños al patrimonio cultural, social y ambiental del territorio. Para eso las consultas populares son un instrumento poderoso, aunque no el único.

Roto el dique será casi imposible contener la avalancha. Se requiere encausarla. Más allá de la atención de coyuntura, una estrategia empresarial estructural implica reconocer los cambios del entorno y entender que la solución está en la base y no en el vértice. La denominada "licencia social" va a depender de la capacidad de construir y preservar dinámicas de cooperación entre comunidades, empresas e instituciones que se sobrepongan a las lógicas transaccionales que han venido gobernando en esa relación. Se tendrá que asegurar que todos naveguen en las mismas aguas y en la misma dirección.

No se trata entonces de impedir, ni de dar, como quien amarra a las fieras o las alimenta para evitar ser devorado. El desafío hacia adelante es dialogar, convenir, resolver.

Esto implica reconocer las agendas relevantes para todos los involucrados, trascendiendo de la gestión de los impactos hacia la creación de valor compartido. Es necesario pasar de las miradas contrapuestas al avistamiento de oportunidades en común. También establecer las garantías mutuas, para que el relacionamiento sea equitativo y constructivo, entre ellas la información suficiente y oportuna, las metodologías idóneas, la adecuada representación, la posibilidad del disenso y los mecanismos de resolución de conflictos. Por otra parte, las empresas tendrán que convertir del diálogo en un hábito, lo que implica entender que para la viabilidad de sus objetivos importa más el camino y que la meta. Y solo sobre estas bases, la inversión pública y privada en los territorios tendrá el efecto de crear valor, en vez de destruirlo para todos, como viene ocurriendo en la atención espasmódica y errática de la conflictividad social.

Imagen tomada de: CABANAJ. Elecciones presidenciales Colombia. [EN LÍNEA]. Citado 07-Feb-2017. Disponible en internet: <http://deracamandaca.com/?p=40677>

Por la fuerza de las circunstancias, instituciones, empresas y las propias comunidades desarrollaron sistemas de protección frente a la adversidad del conflicto armado. Los artefactos, dispositivos, estructuras, funciones, procedimientos y en general abundantes y cuantiosos recursos establecidos para eso han venido quedando obsoletos. Se necesita entonces sustituirlos, para proveerse de los recursos escasos y hoy fundamentales que permitan hacer frente a los nuevos desafíos, que son esencialmente de orden político y social y que se resumen en el objetivo de consolidar su legitimidad entre la población. No es un tema de dinero, sino de competencias. De allí se derivan tareas específicas que será necesario acometer con urgencia, y con estrategia.